

dena al C. Lic. Miguel M. Zárate, á una multa de cincuenta pesos, que enterará en la Jefatura de Hacienda.

2º Se declara que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Vicente Poli, contra los actos de que se queja, y para que ocurra á los tribunales en la mejor forma que le convenga.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Iglesias.*—*Ogazon.*—*Garza.*—*Lozano.*—*Ordaz.*—*Ramírez.*—*Castañeda.*—*Castillo Velasco.*—*Auza.*—*Guzman.*—*Velasquez.*—*Zavala.*—*Landa*, secretario.

En copia. México, Abril 30 de 1874.—*Emilio Ordaz.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Ladislao Vega, en representacion del Cura de la Cañada, por violacion del art. 16 de la Constitucion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que en el juicio seguido por D. Feliciano Camacho, D. Manuel Nieto y D. José María Villa, contra el Cura de la Cañada D. José María Flores, éste por medio de su apoderado D. Ladislao Vega, ha interpuesto el recurso de amparo contra la intervencion del C. Ignacio de Loyola Trejo, como Ministro del Tribunal Superior, que resolvió una apelacion del quejoso. La garantía que se cree violada, es la del art. 16 del Código fundamental, que previene, nadie sea molestado en su per-

sona y bienes, sino por mandamiento de autoridad competente, cuya calidad se le niega al Magistrado Trejo, con motivo de algunas irregularidades en su eleccion.

Desde luego se ve, que esta eleccion fué calificada en tiempo y forma por la Legislatura del Estado, única autoridad competente para estimar su validéz ó nulidad, (art. 63 de la Constitucion de Querétaro). No se comprende pues, bajo que aspecto el poder judicial de la Federacion pueda atribuirse la revision de un acto electoral perfecto y privativo del regimen interior de un Estado (art. 41 de la Constitucion federal.)

Cuando esta incompetencia (que hemos llamado otras veces de origen, para distinguirla de la que hace relacion al Orden en el ejercicio de las jurisdicciones, á cuya conservacion tiende el art. 16) se ha referido á los tribunales de los Estados para nulificar sus actos, se han desestimado las observaciones del Ministerio público, á la vez que se han atendido, cuando amparos de esta naturaleza se han dirigido contra los Gobernadores de hecho de los Estados. Esto dificulta la resolucion acertada del caso presente; pues si se sigue la práctica adoptada, hay que abandonar el sistema lógico de las consecuencias, que dimanando de un mismo principio debieran ser idénticas, sin limitarse á la competencia del poder judicial de los Estados, en lugar de extenderse á todos los poderes establecidos.

La regla, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, aplicada como de interpretacion al debatido artículo 16, no debiera limitarse á los tribunales y jueces de los Estados, sino comprender á toda autoridad de cuya competencia se dudase. Sin embargo, al tratarse de funcionarios del Orden administrativo, cuyos actos se han reclamado por carencia absoluta de jurisdiccion procedente de vicios electorales, se ha decidido: que estos defectos ó incompatibilidades, son objeto esclusivo de apreciacion de las respectivas legislaturas. Así se ha esquivado el exámen del origen de su juris-

dicción administrativa, dejándoles el carácter de autoridad competente.

Para proceder de la manera indicada, se han dejado á un lado las antiguas doctrinas que acordaron validéz á los actos de los jueces de hecho, así como las leyes 3, D. de Offic. Prætor; 4 tít. 4º Part. 3ª, y 5 tít. 1º lib. 11 de la Nov. Rec. Se olvidó que los autores al explicarlas, exponen y fundan el justo motivo, porque en tales casos valen los actos hechos por un juez no verdadero, pero que comunmente fué reputado por tal; y consiste en que el bien público exige imperiosamente que se sostenga, por el trastorno general y daños gravísimos que se resentirían de invalidarlos; y esa necesidad hace entender que la comunidad toda de ciudadanos interesada en evitarlo, suple á ese Juez toda la jurisdicción y autoridad que realmente no tuvo en su principio" [Peña y Peña. lecc. de Práct. for. lecc. 11 núm. 57.]

El jurisconsulto alemán Enrique Pirhing plantea y resuelve la cuestión en los siguientes términos: "An acta Judicií per Judicem existimatum, quívere Judex non est, sint valida?"

Assertio 1ª Si quis existat in possessione officii Judicis, sive potestatis publicæ, licet título, et Jure destitutus sit, adeo que vere Judex non sit, omnia tamen ejus acta valent, si duæ conditiones concurrant, de quibus postea. Hæc est communis, et receptissima DD. sententia ex. l. Barbarius. 3 D. offic. Prætor, et ext. c. 1. §. Veruntamen caus. 3. 9. 7. qui est desumptus ex sínodo Romana, in quibus decernitur, quod gesta per servum, qui dum liber putaretur, officium Judicis exercuit, valida sint, licet ob impedimentum servitutis non esset capax Jurisdictionis exercendæ. Ratio est, quia propter comunem utilitatem jus positivum, tan Canonicum, quam civile, suplet defectum veræ Jurisdictionis, et dat auctoritatem ac valorem omnibus gestis per talem judicem, tam in foro interno consentiæ, quam externo, ad evitanda multa incommoda, et

graves perturbationes, quæ orientur, si communi errore decepto, omnia gesta per talem Judicem rescindenda forent. Sanch. L. 3. de Matr. dis 22 núm 5 et 13. (Jus. Can. 2 lit. 3. s. 3.)

Tarea enojosa sería aglomerar citas de los autores para probar que este ha sido su unánime sentir. Pueden verse entre otros, á Gregorio López, glosando la ley 4ª tít. 4º Part. 3ª; á Acevedo, en la ley 8ª tít. 9 lib. 5º de la Rec.; Murillo, lib. 2º tít. 1º núm. 2 comentando las Decretales; á Bynkershoek Quest. jur. puv. lib. 2 cap. 25 § 4, y á Valiente Apparat jur. pub. lib. 2 cap. 13 números 42, 43 y 44.

El Sr. Peña y Peña despues de haber demostrado la necesidad y conveniencia de seguir en la practica esas doctrinas, concluye: "Todo lo expuesto confirma ser ya una verdad incuestionable en derecho y en política, la que sienta uno de los mas recomendables publicistas (Hamilton) á saber: que el poder judicial no debe tener mezcla alguna en los negocios públicos; que su marcha no debe sufrir alteracion por las ocurrencias políticas; que la firmeza de sus resoluciones debe ser del todo independiente de la permanencia ó variacion de las personas que figuran en los cuerpos representativos y en el poder ejecutivo, y en fin, que el bien general de la nacion directamente interesada en que no vuelvan á abrirse los juicios fenecidos, y la aquiescencia universal de los ciudadanos en el reconocimiento de los jueces, son muy suficientes para subsanar cualquier defecto de jurisdicción por la ilegitimidad rigurosa del nombramiento de los funcionarios judiciales." (Práct. for. lecc. 11 núm 67.)

El desprecio de tan sabias máximas y el olvido de lo que forma una de las fases prominentes de nuestras instituciones no es solo el principio representativo, sino tambien el federativo que hace á los Estados libres y soberanos, en lo tocante á su régimen interior, han colocado en difícil situación á Querétaro cuya legislatura hoy teme, ó estrellarse contra el escollo de la retroactividad

declarando válido lo que fuera nulo, ó dejar espedita esta vía de amparo que entorpece la marcha regular de la justicia ordinaria, cuyas puertas se cierran temporalmente para uno de los litigantes con agravio del artículo 17 de la Constitución. Sean ó no fundados los temores de algunos miembros de la Asamblea sobre esa retroactividad, es lo cierto que se encuentran en la nada sencilla posición, de mandar se tenga por hecho lo que nunca ha existido, acudiendo también á la regla de que cuando hay error común, se suple por el legislador la jurisdicción necesaria. *Ob errorem communem jurisdictio necessaria á legistatore suppletur.* (Sala. Ilust. del Derecho Real de España, lib. 39 tít. 18 reg. 217.)

Y algun remedio es tanto mas preciso, cuanto que todo el que es molestado con una demanda, apela de cualquier auto; y como el grado se califique por el juez *ad quem*, cuya jurisdicción se pone en duda, tras la alzada viene el amparo para detener el curso de la justicia local. Esta es la historia de todos estos juicios, en los que el pueblo atento solo á los resultados prácticos, mira en todo esto, en vez de protección tutelar de garantías, un embolismo que únicamente conduce á estorbar la marcha espedita de la justicia del Estado.

Ya Tocqueville ha indicado: "que hay poquitas leyes que pueden salir ilesas del análisis judicial, por que todas por lo común lastiman algun interes temporal, siendo contadas las que no invocan los litigantes en los tribunales;" y que: "la censura judicial que estos ejercen en la legislación, no puede estenderse indistintamente á todas las leyes." "Los americanos, concluye, han conocido con frecuencia este inconveniente; mas han dejado incompleto el remedio, por temor de darle en multitud de casos una eficacia peligrosa." (De la Democracia en América, parte 1ª cap. 6º)

Y entre estas leyes deben enumerarse las que se refieren á los actos electorales, pues de otra manera sería incierta y precaria la

TOMO V.—PARTE II.

existencia de los poderes públicos.

Supóngase expedido un decreto sobre contribuciones por el número indispensable para formar *quorum* de diputados del Congreso de la Unión. Con el pretexto de faltar causa legal que funde y motive el procedimiento, se reclama por un contribuyente embargado la garantía del artículo 16 de la Constitución. Al efecto se alega la falta del requisito de vecindad de algunos de los diputados que votaron la ley, y se dice que las credenciales de otros por Jalisco son viciadas. ¿Serían revisables todas estas credenciales de los miembros del poder legislativo por el poder judicial de la federación? ¿Se llevaría la interpretación del artículo 16 hasta examinar la competencia de origen para legislar de algunos diputados, como hoy se examina la competencia de origen para juzgar, de un individuo del tribunal de Justicia de Querétaro? Y no faltarían precedentes buscados en la nación vecina para fundar semejante amparo, cuando Brougham nos refiere que: "no solamente tienen las Cortes americanas el derecho de examinar si un acto legislativo es ó no anticonstitucional en sus diferentes cláusulas, sino que deben también ocuparse del modo en que ha sido votado, declarándolo nulo cuando no se hayan observado las ritualidades establecidas." "Así es, continúa, que en el proceso intentado por el Estado contra un individuo llamado *Macbrige* se reconoció que en los casos en que la ley requiere para ser votada determinada mayoría, si la Corte encuentra que esta mayoría indispensable no ha dado su asentimiento al proyecto sometido á su aprobación, le corresponde declarar la nulidad del acto votado por la Legislatura." (De la Democracia y de los Gobiernos mixtos, cap. 30.)

Semejante reclamación no tendría lugar entre nosotros, por que el Congreso general decide exclusivamente las dudas que se suscitan sobre las elecciones de sus miembros, de la misma manera que las legislaturas resuelven las cuestiones relativas á los suyos;

y pasando en autoridad de cosa juzgada los decretos del primero cuando declare la eleccion de Presidente de la República y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, igual respeto merecen las declaraciones de las segundas relativas á los funcionarios judiciales y administrativos de los Estados, supuesto que versan sobre puntos de su régimen interior, cuyo libre ejercicio les garantizan los artículos 40 y 41 de la Constitución.

Las Constituciones Europeas y Americanas, descansan sobre el principio de la division de los tres poderes, que Montesquieu consideró indispensables en las instituciones de un pueblo libre (espíritu de las leyes, lib. 11 cap. 6º). La Constitución de 1857 consagra este principio, confiando el poder Legislativo á un Congreso general y á las legislaturas de los distintos Estados que forman la Federación. Como el nombramiento del Magistrado Trejo proceda de una de estas asambleas, obrando dentro del círculo de sus atribuciones, si el poder Judicial de la Federación lo revisase, haria agravio al principio constitucional de la separacion de los poderes, principio de orden tan elevado como el mismo de igualdad y como la libertad individual.

No basta ser libres é iguales ante la ley, sino que es preciso que las diferentes fracciones del poder que las representa, todas sean libres é independientes en su accion y en sus movimientos. La autoridad federal y la autoridad de los Estados tienen una esfera de accion del todo diferente. Dentro de ella debe girar cada una, y el día en que uno de los poderes la traspasara introduciéndose en la del otro, el orden social estaria amenazado de un trastorno, pues que la division de los poderes afecta inmediatamente á la organizacion de la sociedad. Este principio de division de ambas autoridades, se halla expresamente consignado en los artículos 40, 41 y 117 de la Constitución general.

Y sería tanto mayor la injuria hecha al

Pacto fundamental, cuanto que no se revisaría un acto meramente legislativo sino electoral, ni un acto de un poder constituido, sino del poder constituyente. Se revisaría en suma un acto del poder generador, que publicistas modernos, como Stuart Mill, Grinke y Lieber apartándose de la senda trazada por Montesquieu y Delolme, consideran peculiar de un cuarto poder diferente de los demas, el electoral.

Y este poder está reconocido expresamente en la Constitución del Estado de Querétaro, cuya integridad en un punto acerca de su régimen interior, se atacaría declarando que el Magistrado Trejo no es autoridad competente para decidir una cuestion judicial sometida á la Sala que ocupaba en el Tribunal. Jameson, en una obra publicada en 1867, dice: "En muchos gobiernos modernos, incluyendo el nuestro, hay cuatro ramos ó departamentos distintos, á los cuales están confiados los poderes delegados por el soberano. De estos, el primero es el de los electores, cuya funcion es la de escoger de entre ellos mismos las personas empleadas en los otros departamentos. El cuerpo electoral es el mas numeroso en el Estado, de los encargados de una funcion oficial. Comprende los sufragantes, ó en un sentido complejo, el *pueblo*, y difiere de los otros tres poderes, en que constituye un cuerpo que jamas forma una sola reunion, sino que obra en diversas fracciones para que sea impracticable la confabulacion" (De la convencion constitucional capítulo 2º).

Y en verdad, esta cuádruple division del poder en Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es la mas lógica y natural, porque encierra las distintas manifestaciones del ejercicio de la soberania del pueblo, que consisten en elegir, legislar, ejecutar y juzgar, (Gonzalez. Derecho constitucional lecc. 10).

El artículo 117 del Código fundamental, prohíbe á los funcionarios federales el ejercicio de toda facultad que no les esté ex-

presuntamente concedida, y que por lo mismo se entiende reservada á los Estados. No siendo el poder judicial de la Federacion conservador de las Constituciones de estos, no puede declarar si sus actos son ó no conformes á ellas. De esta naturaleza es la decision sobre si el C. Trejo es ó no Magistrado, decision previa á la de si es ó no autoridad competente, para deducir de aquí si sus actos importan ó no violacion de garantías.

Este sistema de inducciones sobre ser peligroso y ageno de la práctica judicial, contraria los artículos 101 y 102 de la Constitucion, segun los que debe compararse simplemente el acto reclamado con la garantía establecida, para que resulte ó no su violacion como directa consecuencia.

Y no sucediendo así en el caso presente, el Promotor fiscal pide se deniegue el amparo solicitado.

Querétaro, 5 de Diciembre de 1873.—
Luis Castañeda.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Querétaro, Diciembre 5 de 1873.—Visto éste juicio de amparo promovido por el C. Ladislao Vega, como apoderado del Dr. D. José M. Flores, contra los actos del C. Lic. Ignacio Trejo, que funjia de Magistrado del Superior Tribunal de Justicia del Estado y multa, que éste impuso con ese carácter, cuyos actos y multa tuvieron lugar con motivo de una recusacion que se interpuso en unos juicios verbales interpuestos por los CC. Feliciano Camacho, Manuel Nieto y José M.^a Villaseñor, contra el expresado Dr. Flores; visto el escrito de queja que obra á fojas 1.^a de este expediente, en que alega el C. Vega la absoluta falta de autoridad con que procedió el C. Trejo, falta que hace consistir en no haber sido electo Magistrado popularmente, conforme á la Constitucion del Estado. Visto el informe rendido por la autoridad ejecutora, fojas....

lo espuesto por el C. Promotor fiscal al correrle traslado conforme á la ley, fojas;..... las pruebas rendidas; citacion para sentencia, y tdo lo demas que verse debia.

Considerando: que de los documentos presentados y se ven á fojas..... resulta que en efecto no precedió eleccion popular de donde emanara la autoridad que ejerciera el C. Trejo, circunstancia indispensable en la Constitucion del Estado, y sin la cual bajo ningún concepto puede adquirirse.

Considerando: que esa falta de autoridad ha venido á comprobarse todavia de la manera mas terminante, no solo con los conceptos vertidos por el Ejecutivo del Estado en su discurso de apertura de sesiones del Congreso del mismo Estado en 16 de Setiembre último, sino con la decision terminante de este mismo Congreso, en su decreto número 1, en el cual se declara, que hay necesidad respecto del Superior Tribunal del Estado y se mandan hacer elecciones de Magistrados del mismo.

Considerando por último: que por esa falta de autoridad absoluta en el C. Lic. Ignacio Trejo, resulta: que con los actos y multa de que se queja el repetido C. Ladislao Vega, apoderado del Sr. Flores, quedó violado el artículo 16 de la Constitucion federal, que previene: nadie pueda ser molestado en su persona ó intereses, sino en virtud de mandamiento expreso de *autoridad competente*.

Por tales razones, con fundamento del artículo 16 ya citado y del 101 de la Constitucion General de la República, y finalmente del 1.^o de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia Federal ampara y protege al C. Dr. José M.^a Flores, contra los actos y providencias dictadas por el C. Lic. Ignacio Trejo, con relacion á los juicios que le promovieron Camacho, Nieto y Villaseñor, y contra la multa que impuso al referido Flores. Hágase saber á las partes, previniendo á la actora reponga con el papel sellado correspondiente, el comun de que se ha usado en este expediente; remí-

tanse las copias de este fallo y alegatos, al redactor del *Semanario Judicial*, y elévese este juicio á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision.

Así definitivamente juzgando lo pronunció y firmó el C. Juez de Distrito, primer suplente en ejercicio, Mariano Pimentel.

Doy fé.—*Mariano Pimentel*.—*Francisco Ruiz*,—secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 7 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Radislao Vega en representación de D. José M^a Flores, contra los procedimientos del Lic. Ignacio Trejo, que con el caracter de Magistrado del Tribunal Superior del Estado, conoció del incidente de recusacion en los juicios que seguia D. José M^a Flores contra Feliciano Camacho, Manuel Nieto y José M^a Villaseñor, imponiendo á su poderdante una multa de cincuenta pesos por cada una de las recusaciones; con cuyos procedimientos se han violado en concepto del quejoso, las garantías que otorgan los artículos 16 y 22 de la Constitucion Federal, por no haber sido elegido popularmente el Lic. Trejo para la Magistratura que desempeña, como lo exige la Constitucion particular del Estado, y por excesivas las multas que impuso al recusante.

Considerando: que por constancias oficiales que obran en los autos, aparece: que efectivamente el Lic. Ignacio Trejo cuando conoció del incidente de recusacion, ejercía las funciones de Magistrado por decreto de la Legislatura y no por eleccion popular como lo dispone el artículo 96 de la Constitucion particular del Estado; por cuyo motivo, con los actos que han motivado este recurso, ha violado el artículo 16 de la Constitucion Federal; con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se decreta: que es

de confirmase y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 5 de Diciembre del año pasado, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al Dr. D. José M^a Flores, contra los actos y providencias dictadas por el C. Lic. Ignacio Trejo, con relacion á los juicios que le promovieron Camacho, Nieto y Villaseñor y contra la multa que impuso al referido Flores.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*P. Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*Pedro Ordaz*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*M. Arza*.—*Simon Guzman*.—*Luis Velasquez*.—*M. Zavala*.—*Lic. Enrique Landá*, secretario.

Es copia que certifico. México, 14 de Abril de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Lic. Luis G. Zacarías y demas interesados en la posesion del templo de los Remedios en Cholula, contra los procedimientos del C. Gefe político del mismo Distrito, que mandó despojar á los referidos, de dicho templo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Luis G. Zacarías, presidente de la junta edificadora del templo de los Remedios, contra el C. Gefe